

En vísperas de la reunión del G-20

A días de la cumbre del G-20 en Buenos Aires, de la más importante institución del multilateralismo global, al contrario de la imagen que quiere mostrar el Gobierno argentino, prolija y “de buen alumno” de los poderosos de este mundo, y en particular del FMI, la realidad de la sociedad argentina no puede ser más conflictiva y preocupante. No sólo por la falta de certezas respecto de la inflación y del tipo de cambio, o por la sanción de un Presupuesto Nacional de ajuste, que asegura profundizar la recesión con inflación, sino por un conjunto de acciones y políticas que implican deliberadamente el aumento de la conflictividad social y la destrucción de activos históricos del pueblo argentino. De un cambio que más que por superación, va por destrucción.



En primer lugar, sobre las políticas represivas en contra de los trabajadores de la economía popular, de los humildes, de los que no tienen techo, ni tierra, ni trabajo. El asesinato de dos de estos trabajadores y militantes sociales, busca mostrar un disciplinamiento de los sectores populares con la violencia más aviesa y directa: asesinar por la espalda. Nos solidarizamos entonces con los trabajadores de la CTEP, Barrios de Pie, CCC y demás organizaciones de la economía popular que se movilizan en reclamo ante un gobierno que muestra su peor rostro, que no da respuesta a la creciente precarización de sus vidas y envía a las fuerzas de seguridad para implementar el orden en base a la violencia institucional. Hay una pretensión tanto del gobierno nacional como de la oposición simulada, de que la movilización y la protesta sean cada vez menos frecuentes, que los ciudadanos tengan miedo, y se tenga una política de seguridad con policías cada vez más preparados para reprimir a los que protesten, aunque sea en pacíficamente.

En segundo lugar, consideramos que son también políticas en contra de la lucha de los trabajadores del sector público, especialmente del caso Aerolíneas Argentinas, del cual el gobierno ha declarado ya no su intención de privatizar -como fuera en los '90-, sino de vaciar o destruir. Basta escuchar las declaraciones del Ministro de Transporte, que “envidiaba a Perú porque no tenía Aerolíneas de bandera”. O las declaraciones del presidente de Aerolíneas Argentinas: “que la empresa está virtualmente quebrada” sólo para favorecer a las empresas de ‘bajo costo’, y a una parte del “capitalismo de amigos” que el gobierno no deja de alentar.

Las políticas contra la educación pública y contra el conjunto de los docentes estatales son otras acciones que generan mayor conflictividad social. Se manifiesta contra los Profesorados, por la ley recientemente sancionada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que busca cerrarlos y sustituirlos por la UNICABA, una universidad sin consenso y por ahora inexistente. Es también la descalificación de la lucha de los docentes de la Provincia de Buenos Aires por un salario digno, por paritarias, por infraestructura que garantice calidad educativa para todos, otro activo del país, que también el Gobierno busca destruir, como estrategia de empobrecimiento disciplinamiento y favorecimiento de lo privado y un mercado concentrado. La búsqueda de privatización de la educación pública, la municipalización de la misma favorecidas por el FMI, así como la falta de infraestructura y salarios dignos, es una deriva que conduce a escuelas de dos categorías: las de aquellas familias que por sus ingresos puedan mandar sus hijos a escuelas privadas o de aquellas que solo puedan mandarlos a las escuelas públicas –a cargo, “de hecho”, de los municipios- para su contención y alimentación.



Ello también muestra que las políticas públicas buscan el vaciamiento de las diversas instituciones y agencias tecnológicas de Estado, como Ciencia y Tecnología, INVAP, CONICET, INTA, INTI, el desmantelamiento del plan de desarrollo de la energía nuclear y de Aerolíneas Argentinas, entre otros, que se dejan de financiar y destruyen activos tecnológicos de toda la sociedad. O el clima del proyecto de modernización del Estado que lleva a que los empleados públicos la vivan como una amenaza constante de despido, no renovación de sus contratos, depreciación de salarios y clima de tensión y hostilidad permanente de las gerencias hacia los trabajadores en los propios ambientes de trabajo.

Las acciones contra los trabajadores de la salud pública son otra muestra de esto, por falta de presupuesto para los hospitales, por la pérdida de profesionalidad para enfermeras, todo lo cual también tiende a desestructurar otro activo de la sociedad argentina: la salud pública.

Los trabajadores del sector privado formalizados de las empresas privadas y públicas -como Siam o Astilleros Río Stgo.- y sus luchas por no ser suspendidos, cesanteados y despedidos, son expresión de un esquema económico que busca destruir el mercado interno y concentrar la economía en beneficio de unos pocos sectores de máxima concentración como son las finanzas, los servicios públicos energéticos, el agroexportador. Lo son también las políticas que inviabilizan las diversas fábricas –PyMEs y medianas empresas-, que cierran sus puertas día a día, como consecuencia de un plan recesivo premeditadamente hecho para obtener la destrucción de otro logro de la sociedad argentina: su proceso de industrialización.

Por último, esta conflictividad se expresa también en la lucha de las mujeres por femicidios que no tienen sanción en la justicia como el de Lucia Pérez y otros tantos casos más que quedan impunes. Y de las movilizaciones que claman justicia por este caso y otros tantos, y reclaman al Gobierno basta de ajuste en un presupuesto que solo destina 11 pesos por año, por mujer, para prevenir la violencia de género. La sociedad de derechos también se erosiona en este modelo.



En suma, el Área de Estado y Políticas Públicas de la FLACSO (Sede Argentina) en las vísperas de la reunión del G-20, primero, quiere solidarizarse con estas luchas en contra el modelo neoliberal y sus políticas públicas de destrucción de activos de la sociedad y corrimiento del Estado de la cuestión social en favor de la concentración de la desigualdad y de una gerencia trasnacional del Estado. Asimismo, ponemos de manifiesto la duplicidad del mensaje del Gobierno de pretender presentar a la Argentina ante el G-20 e inversores externos en una ciudad blindada y expulsiva, como un país autónomo, creíble y lleno de oportunidades, mientras que sus propios ciudadanos sufren políticas de ajuste, precarización y pérdida de derechos.

Segundo, manifestar nuestra preocupación por el incumplimiento de las metas fijadas en la fundación del G-20, recordando el punto 3 de la declaración del Grupo, que decía: “Partimos de la creencia de que la prosperidad es

indivisible; de que el crecimiento, para que sea constante, tiene que ser compartido; y de que nuestro plan global para la recuperación debe centrarse en las necesidades y los puestos de trabajo de las familias que trabajan con ahínco, no sólo en los países desarrollados, sino también en los mercados incipientes y en los países más pobres del mundo”.

Y, por último, señalamos que en el país que se reunirán las principales potencias económicas y militares, que están inmersas en una guerra comercial mundial y la tensión entre unilateralismo y multilateralismo, la política de inserción en el mundo de la Argentina, fue la de volver a ser en los últimos años el “patio trasero” de los intereses de la potencia hegemónica regional, de un poder global que no le interesa la posibilidad de un verdadero multilateralismo ni la autonomía o el desarrollo de nuestra región.

Área de Estado y Políticas Públicas

FLACSO Sede Argentina